

5,18

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

86.º de 193 países

19.º de 35 países americanos

8.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

5,07

TRATA DE PERSONAS **6,00**

TRÁFICO DE PERSONAS **5,00**

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN **4,50**

TRÁFICO DE ARMAS **6,50**

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS **6,50**

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES **4,00**

DELITOS CONTRA LA FLORA **4,50**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **5,00**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **3,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **2,00**

COMERCIO DE COCAÍNA **7,50**

COMERCIO DE CANNABIS **7,00**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **5,50**

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA **5,00**

DELITOS FINANCIEROS **4,00**



ACTORES CRIMINALES

5,30

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **4,00**

REDES CRIMINALES **6,00**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **5,50**

ACTORES EXTRANJEROS **6,00**

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO **5,00**



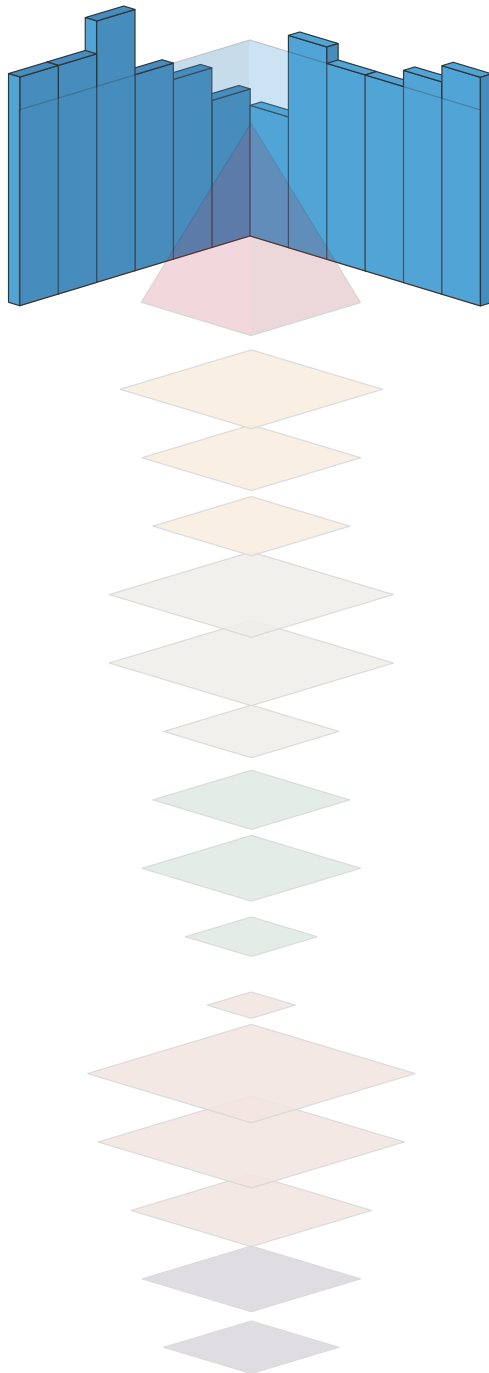
6,17

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





CHILE



6,17

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

33.º de 193 países

4.º de 35 países americanos

2.º de 12 países de América del Sur

| | |
|--|------|
| LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA | 7,00 |
| TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 7,00 |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 8,00 |
| POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES | 6,00 |
| SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN | 5,50 |
| CUERPOS DE SEGURIDAD | 4,50 |
| INTEGRIDAD TERRITORIAL | 4,00 |
| LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO | 6,50 |
| CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA | 6,00 |
| APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 6,00 |
| PREVENCIÓN | 6,50 |
| ACTORES NO ESTATALES | 7,00 |



5,18

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 5,07



ACTORES CRIMINALES 5,30



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Chile es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. Las víctimas son hombres, mujeres, niños y adolescentes, que son explotados con fines sexuales y laborales, especialmente en los sectores de la minería, la agricultura, la construcción, la venta ambulante, la hostelería, la restauración, la confección y el servicio doméstico. La trata de personas ha ido en aumento en los últimos años y los traficantes aprovechan las aperturas de fronteras y los pasos no autorizados para introducir personas en Chile con falsos pretextos. A pesar de este creciente problema, las estadísticas del Gobierno chileno no reflejan plenamente el alcance de la trata de personas en el país. En la actualidad, el Gobierno investiga y procesa a pocos traficantes y los jueces suelen suspender o conmutar las condenas de menos de cinco años, incluso en los casos graves de trata de personas.

Además de la trata de personas, Chile se enfrenta a un problema cada vez mayor de tráfico de personas. En el país operan redes criminales con vínculos internacionales, que utilizan diversos métodos para introducir personas en Chile, como pasos fronterizos no autorizados, agencias de viajes falsas y vuelos alquilados. Los actores nacionales obtienen importantes beneficios de estos mercados, lo que dificulta la lucha eficaz contra el problema. La pandemia de la COVID-19 y la crisis migratoria no han hecho más que empeorar la situación, especialmente para las poblaciones vulnerables, como los venezolanos, los peruanos y los haitianos.

La extorsión y los cobros ilegales por protección son especialmente frecuentes en relación con el tráfico de drogas en Chile. La narcoextorsión, en la que las bandas secuestran a miembros de bandas rivales o a sus familiares a cambio de dinero o drogas, es una táctica habitual. Las denuncias de extorsión han disminuido en los últimos años, pero los cobros ilegales por protección siguen produciéndose en las cárceles, donde los reclusos de más edad o más peligrosos exigen dinero a las familias de los nuevos reclusos a cambio de protección. Además, las bandas de delincuentes implicadas en el tráfico de drogas amenazan a los negocios legales de las regiones fronterizas a cambio de protección, lo que constituye una preocupación creciente, debido a la expansión del comercio de cocaína y la trata de personas.

TRÁFICO

Chile importa y exporta armas pequeñas. El país ha experimentado un aumento de la confiscación de armas ilegales o no registradas, lo que indica una posible corrupción y un aumento de la delincuencia relacionada con las armas de fuego. Los delincuentes en Chile prefieren pistolas, revólveres y escopetas, con una tendencia creciente hacia el uso de armas de fogeo modificadas. Aunque Chile no es un semillero de tráfico de armas en comparación con otros países latinoamericanos, ha experimentado un reciente aumento de dicha actividad. Los principales delitos asociados a las incautaciones de armas son la tenencia ilícita de armas de fuego y el tráfico de drogas. Las armas ilícitas suelen importarse de Estados Unidos (concretamente de Texas y Florida) a través de empresas ficticias. Debido a su proximidad a la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, Iquique se ha convertido en una ruta para el tráfico de armas hacia países vecinos, con importantes problemas de crimen organizado.

La mayor parte de la ropa falsificada descubierta en las inspecciones portuarias de Chile procede de China. Además, se ha producido un aumento de las marcas falsificadas que se venden en el país, en parte debido a la diáspora venezolana. Dado que Chile tiene uno de los coeficientes de funcionarios de aduanas más bajos del mundo, resulta difícil controlar todos los productos falsificados que entran en el país. Además, el comercio ilegal de productos sujetos a impuestos especiales, especialmente cigarrillos, es un problema creciente en Chile. Los cigarrillos de contrabando entran en el país por mar, desde China e India, y por tierra, desde Bolivia y Perú. A pesar del considerable número de cigarrillos de contrabando incautados en el 2021, el mercado sigue expandiéndose en el país. Las regiones septentrionales se ven especialmente afectadas por el comercio ilícito de estos productos.

MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal es una preocupación notable en algunas partes de Chile, donde las pruebas demuestran que ha provocado el agotamiento de miles de hectáreas de bosques autóctonos en los últimos años. Las principales causas de la deforestación son la expansión inmobiliaria, la agricultura y la ganadería y la producción de pasta de papel con árboles exóticos. A pesar de ello, Chile cuenta con pocos fiscales para delitos medioambientales y la mayoría de los bosques del país son de propiedad privada, lo que limita la capacidad de las autoridades para combatir la tala ilegal. La agencia reguladora, escasamente financiada, también ha sido acusada de connivencia con grupos económicos. Además, la estrecha definición legislativa de los bosques significa que cualquier terreno sin un número específico

de hectáreas de cubierta arbórea puede utilizarse para actividades económicas, convirtiendo de hecho los delitos medioambientales en actividades legales en Chile.

Aunque las autoridades nacionales afirman que el tráfico de especies silvestres no es habitual, sigue siendo un problema. Aunque la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica han reducido el tráfico de animales salvajes, las recientes incautaciones y el número de animales rescatados que requieren rehabilitación indican una tendencia preocupante. La demanda de aves, más fáciles de ocultar, es el principal motor del comercio ilegal de animales exóticos. Los animales se introducen de contrabando en el país a través de pasos no autorizados y se ocultan de diversas formas y a menudo son objeto de malos tratos físicos, cuando los llevan ilegalmente a través de las fronteras. El mercado del comercio ilegal de animales exóticos es lucrativo y supone un incentivo para las pequeñas organizaciones criminales con conexiones en los países de origen, principalmente Brasil y Bolivia. La laxitud de las sanciones por estos delitos no disuade a los delincuentes de dedicarse a ellos.

En Chile, la mayoría de los recursos minerales son propiedad del Estado y están bajo su control y solo se conocen algunas actividades delictivas, principalmente cuando las empresas autorizadas incumplen la normativa, sobre todo al contaminar el agua. Sin embargo, el contrabando de oro ilegal hacia Chile continúa, principalmente desde Perú, donde predomina la minería ilegal. El oro de contrabando está destinado a ser blanqueado y exportado ilegalmente a terceros países, como los Emiratos Árabes Unidos.

DROGAS

El mercado de la heroína en Chile sigue siendo reducido y se han detectado pocos casos de comercio de heroína. Sin embargo, existen pruebas de que, para importarla, se utilizan los mismos mecanismos que para importar otras drogas. Por otra parte, Chile sigue siendo un importante país de destino y tránsito para el comercio de cocaína, debido a su situación estratégica (está al lado de dos de los mayores países productores de cocaína del mundo, Perú y Bolivia) y al creciente consumo interno. De hecho, Chile es uno de los principales mercados de consumo de cocaína de América Latina. La porosidad de las fronteras con Bolivia y Perú, el escaso control estatal y policial y las extensas costas chilenas facilitan el acceso de los narcotraficantes. Además, los cargamentos de cocaína con destino a Europa, Estados Unidos, Oceanía y Asia se reexportan a través de puertos no tradicionales del litoral chileno. Chile es también un importante proveedor de sustancias controladas, como el permanganato potásico, utilizado en la producción de cocaína.

Chile tiene una de las tasas de consumo de marihuana más altas de América Latina. Los datos sobre incautaciones muestran que Paraguay es responsable de la mayor parte del contrabando de cannabis que entra en el país, pero ha

incrementado la popularidad de la *creepy* colombiana y la marihuana cultivada en el país también forma parte del mercado. En los últimos años, la marihuana producida localmente con mayor contenido de THC ha ido sustituyendo a las importaciones paraguayas, debido a la reducción de la oferta de droga durante las protestas sociales y la pandemia de la COVID-19. A pesar del aumento de las incautaciones, la demanda interna de cannabis sigue siendo alta y el valor del mercado se encuentra entre los más altos de los mercados criminales.

El comercio de drogas sintéticas en Chile procede principalmente de países europeos, como los Países Bajos, Alemania y España, pero también de Argentina y Colombia. El público objetivo de estas drogas son los adultos jóvenes, principalmente en fiestas de música electrónica. Aunque inicialmente se vendían a personas de alto nivel socioeconómico, las adulteraciones de las drogas han permitido que la sustancia llegue a un grupo de clientes mucho más diverso. El comercio de drogas sintéticas en Chile no se ha asociado a la violencia ni a pruebas claras de la existencia de redes criminales y la mayoría de las incautaciones se refieren a personas que poseen o transportan la droga de forma independiente. Una droga sintética que ha llamado la atención recientemente es la 2C-B, una droga psicodélica basada en la ketamina, que también se conoce como «cocaína rosa» o «tusi».

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Chile ha experimentado recientemente un aumento de la ciberdelincuencia, con millones de intentos de ciberataques en los últimos años. Sin embargo, el país también se ha vuelto más consciente de la ciberseguridad, con una creciente cultura de concienciación, tanto entre las empresas como entre los individuos. Como resultado, Chile es ahora el país sudamericano con menos probabilidades de sufrir un ciberataque y se considera moderadamente resistente en términos de ciberseguridad. A pesar de estos avances, los expertos advierten de que Chile sigue siendo un país vulnerable, debido a su creciente desarrollo digital.

DELITOS FINANCIEROS

Chile ha experimentado un aumento de los delitos financieros, entre ellos los esquemas Ponzi y la evasión fiscal. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha alertado del creciente número de estas estafas, conocidas localmente como «mandalas», «células», «flores» o «tejidos». Estos esquemas ofrecen porcentajes de rentabilidad irreales bajo la apariencia de una obra social. Para hacer frente a los delitos financieros, el Gobierno chileno ha introducido medidas para aumentar la responsabilidad de las empresas en la prevención de estos delitos. A pesar de los esfuerzos, el país sigue siendo vulnerable a los delitos financieros, debido a la alta rentabilidad y el bajo riesgo de detección asociados a estos delitos.

ACTORES CRIMINALES

Determinar el número de grupos de tipo mafioso que operan en Chile es un reto, ya que muchos permanecen en el anonimato hasta que son llevados ante la justicia. Las redes familiares de narcotraficantes locales difieren de los grupos de tipo mafioso tradicionales y el país no cuenta con grandes bandas mafiosas con altos niveles de organización y número de miembros, en comparación con sus países vecinos. Sin embargo, Chile ha visto un aumento de la violencia por parte de grupos más pequeños, que se forman para controlar el narcotráfico local, lo que plantea más retos para las autoridades en el futuro. De hecho, el crimen organizado en Chile consiste principalmente en redes criminales descentralizadas que operan en zonas marginales. Estas redes se están expandiendo en las regiones del norte, con una creciente implicación en otros mercados ilícitos, debido a la crisis migratoria en la frontera.

Últimamente, la presencia de actores extranjeros en los mercados delictivos chilenos es cada vez mayor. Los cárteles mexicanos y colombianos han identificado a Chile como un buen mercado para las drogas y un país alternativo para los envíos a Europa. Los cárteles mexicanos han empezado a construir instalaciones para el cultivo de cannabis con

THC altamente concentrado. Las mafias venezolanas obstaculizan el contrabando de personas a Chile y, según los informes, les cobran peaje por utilizar el paso ilegal a Colchane, matando a quienes se niegan.

Los actores del sector privado participan sobre todo en actividades de blanqueo de dinero, formando empresas pantalla, ficticias y de papel. Los productos financieros más utilizados para blanquear dinero son el dinero en efectivo, las cuentas bancarias y las transferencias bancarias. Las empresas más vulnerables en el proceso de blanqueo de capitales son los notarios, las empresas automovilísticas, los servicios jurídicos contables, los minoristas, los comerciantes electrónicos, los bancos, las agencias inmobiliarias y las casas de cambio.

La corrupción dentro del Estado chileno facilita los mercados delictivos, sobre todo en las fronteras del país. Algunos agentes de la Policía colaboran con grupos delictivos en el tráfico de drogas, robos y otras actividades delictivas y algunos guardias de prisiones se han visto implicados en casos de corrupción y tráfico de drogas. Sin embargo, no hay pruebas de que los actores integrados en el Estado dominen las economías delictivas o influyan en los procesos democráticos en Chile.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Gobierno chileno ha demostrado su voluntad de combatir el crimen organizado y las actividades ilegales durante las dos últimas décadas, a pesar del reciente aumento de los homicidios y de los crecientes niveles de inseguridad. Aunque las protestas han puesto de manifiesto enormes discrepancias entre la clase política y la situación económica del país, Chile figura entre los países mejor situados de América Latina en cuanto a corrupción y gobernabilidad. Sin embargo, el rechazo a su nueva Constitución ha mostrado un país cada vez más polarizado y un Gobierno dividido. El Gobierno chileno proporciona un acceso moderado a la información; sin embargo, en los últimos años ha habido pocos avances significativos en este ámbito. Este estancamiento, unido a los escándalos de corrupción y a la insatisfacción ciudadana con la clase política, ha generado un sentimiento de desilusión entre la población.

Chile ha firmado todos los tratados internacionales relacionados con el crimen organizado y cumple con sus obligaciones internacionales. Además, muestra una fuerte acción policial contra la delincuencia y coopera con INTERPOL. Sin embargo, el Gobierno actual ha expresado la necesidad de trabajar con los países vecinos para combatir

el crimen organizado. Por otra parte, Chile cuenta con una serie de leyes para combatir el crimen organizado, como leyes sobre lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, control de armas, corrupción y trata de personas. También se han introducido nuevas leyes para establecer un marco jurídico eficaz contra el crimen organizado, como leyes sobre ciberdelincuencia y migración. Sin embargo, hay deficiencias en la protección del medio ambiente, ya que las leyes del país sobre protección de la naturaleza son laxas, lo que deja resquicios para que las empresas mineras contaminen indiscriminadamente y sin rendir cuentas. A pesar de tener menos leyes e instituciones que otros países latinoamericanos, la eficacia de Chile en la lucha contra el crimen organizado es mejor que la de otros países con marcos más amplios.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial chileno se enfrenta a problemas de recursos, con una baja tasa de jueces per cápita y un bajo porcentaje del PIB invertido en el sistema. Aunque el Poder Judicial es en gran medida independiente, se considera discriminatorio en términos de acceso y la mayoría de la población evalúa su actuación como deficiente. La estructura

piramidal jerarquizada del Poder Judicial, que se entrelaza con las redes del Poder Ejecutivo y el Legislativo, pone en peligro la correcta intervención de las sentencias o la ejecución procesal de la ley. La escasez de condenas y la no ejecución de las penas por delitos organizados graves, como la trata de personas, han aumentado la percepción de impunidad por parte de la opinión pública. El sistema penitenciario chileno también es débil, con superpoblación y condiciones inadecuadas. Los reclusos han replicado sus estructuras criminales y han establecido zonas de hegemonía dentro de las prisiones, lo que ha permitido que florezca el tráfico intracarcelario y que el negocio de la droga se expanda desde las prisiones hacia el exterior.

Los cuerpos de seguridad de Chile están gestionados principalmente por la Policía nacional militarizada, los Carabineros de Chile y la PDI, que investiga delitos como el tráfico de drogas y el crimen organizado. Sin embargo, no existe una Defensoría del Pueblo, con jurisdicción para conocer presuntos casos de uso excesivo o indiscriminado de la fuerza, lo que resulta problemático, dado que las fuerzas policiales tienen un grave déficit de rendición de cuentas y no suelen estar sometidas al poder político cívico. La reputación de Carabineros ha caído drásticamente tras las protestas del 2019, en las que organizaciones internacionales constataron que la actuación de la Policía y el Ejército no se había ceñido a las normas y los estándares internacionales de derechos humanos en la gestión de asambleas y respecto al uso de la fuerza.

Las extensas fronteras de Chile suponen un reto para el control de actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. Mientras que la cordillera de los Andes sirve de barrera natural con Argentina, las porosas fronteras con Bolivia y Perú, en el desierto de Atacama, son difíciles de controlar y se han identificado numerosos pasos fronterizos irregulares. Actividades delictivas como el tráfico de personas y la trata de drogas son especialmente frecuentes en el norte, donde se cree que controlan las mafias venezolanas y bolivianas. Los puertos del norte de Chile también son atractivos para las organizaciones delictivas, ya que ofrecen acceso a los mercados internos de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. A pesar de los esfuerzos por controlar estas actividades, los mercados criminales continúan expandiéndose, lo que ha llevado a la implementación de estados de excepción y a la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública. En materia de ciberseguridad, Chile no ha sufrido ningún ataque importante en los últimos años y se considera el país más seguro de América Latina en este tipo de ataques, aunque aún es necesario introducir mejoras.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Chile está ampliamente considerado uno de los países más seguros del mundo en términos de blanqueo de dinero y el más seguro de América Latina. El Gobierno ha puesto en marcha medidas como la creación de la Unidad de Análisis

Financiero. También ha aprobado la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas y ha impuesto multas sustanciales para poner freno a las actividades de lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se ha producido un aumento de los flujos financieros ilícitos hacia el país, sobre todo debido al auge de los grupos de delincuencia organizada que necesitan blanquear sus ganancias procedentes de actividades ilegales. La principal fuente de estos fondos es el narcotráfico. Otro canal potencial para las actividades de blanqueo de dinero es el juego en línea no regulado. Los servicios legales de contabilidad, los minoristas y los comerciantes electrónicos han sido identificados como los tres sectores con mayor riesgo de blanqueo de capitales.

En cuanto a su marco de política macroeconómica, Chile tiene una base sólida y ostenta uno de los PIB per cápita más altos de América. Aunque los recientes cambios en la política fiscal han provocado un aumento de los impuestos, el país ha facilitado la creación de empresas, al permitir el registro en línea de sociedades anónimas cerradas y al introducir un sistema electrónico para la presentación de reclamaciones. Además, Chile ha puesto en marcha un registro unificado de garantías y ha mejorado la protección de los inversores. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa medioambiental puede ser un proceso largo e impredecible, lo que es motivo de preocupación. El sector privado contribuye significativamente a la economía chilena, con sectores de inversión claves, como la minería, las finanzas/seguros, la energía, las telecomunicaciones, la fabricación de productos químicos y el comercio mayorista.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Chile ha establecido varios programas y políticas para prestar apoyo y protección a las víctimas y los testigos de delitos, incluidos el tráfico de personas y la trata de seres humanos. El programa de apoyo a las víctimas y las Unidades Regionales de Apoyo a víctimas y testigos proporcionan orientación, apoyo y protección a víctimas y testigos durante el proceso penal. Sin embargo, las ONG han denunciado la escasez de fondos para la asistencia a las víctimas, en particular para los niños y los hombres víctimas, lo que dificulta los esfuerzos de apoyo a las víctimas. Aunque existe un grupo de trabajo interinstitucional gubernamental sobre la trata, que coordina a diversos organismos para ayudar a las víctimas, la prestación de servicios de apoyo a las víctimas es desigual en todo el país.

Chile ha puesto en marcha diversas estrategias para prevenir y combatir el crimen organizado, entre las cuales destacan los esfuerzos para reducir la pobreza y la pobreza extrema y la creación de planes específicos para hacer frente al blanqueo de dinero, la trata y el tráfico de personas y el narcotráfico. El índice de desarrollo humano del país es el más alto de América Latina, aunque Chile también está considerado uno de los países más desiguales de la región. El Plan Nacional contra el Narcotráfico ha permitido aumentar las incautaciones de droga, pero aún no existe una política

nacional contra el crimen organizado. El Gobierno chileno ha creado un consejo de la sociedad civil para implicarla en las políticas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

La cobertura mediática en Chile se enfrenta a desafíos, debido a la concentración de la propiedad de los medios y a la falta de recursos. La libertad de prensa en Chile se ha ido deteriorando, el periodismo de investigación ha perdido terreno y aumentan los ataques contra periodistas. Aunque los medios de comunicación de masas son diversos, en su mayoría pertenecen a los mismos grupos empresariales, lo que limita el pluralismo y la vulnerabilidad de los periodistas que destapan casos de corrupción o informan sobre conflictos entre el Estado y las comunidades mapuches. A pesar de estos retos, Chile sigue siendo una democracia estable, con numerosas ONG legalmente registradas y una sociedad civil muy activa e implicada.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.